

● LAS CLAVES DEL PODER
ACTUALIDAD ECONÓMICA

Cómo repartir la riqueza

Subir el salario mínimo y las pensiones favorecerá el consumo y el crecimiento, pero puede poner en peligro la competitividad

Mariano Guindal
Madrid



Existe un amplio consenso entre las élites de que ha llegado el momento de repartir la riqueza. El problema es cómo hacerlo sin dañar la competitividad de las empresas y sin agravar más el déficit y la deuda pública que se sitúa entre las más elevadas de la UE. Este es el núcleo de la política económica que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha encargado a Nadia Calviño. Un sudoku que tendrá que pactar con sus "socios preferentes" de Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Este será el ADN del gobierno "progresista" en negociación.

Una de las primeras medidas que adoptará este hipotético gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias será subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 1.000 euros al final de la legislatura. Esto supone un incremento anual del 8%, tras la subida este ejercicio del 22,3%.

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valero, preferiría que el SMI para el próximo año lo fijaran los agentes sociales, como ha pedido la patronal CEOE. Pero en el caso de no llegarse a una solución, el ejecutivo impondría su criterio de situarlo en el 60% del salario medio en el 2023. Una "auténtica barbaridad", según el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien amenaza con bloquear la negociación colectiva. No piensan así

ni los sindicatos, ni Podemos, ni ERC, quienes coinciden en que es el mejor camino para terminar con el "austericidio" y repartir la riqueza. Por tanto, si Sánchez consigue formar un gobierno "progresista" y de "izquierdas", la subida sería aprobada "cueste lo que cueste".

La consecuencia es que se impulsaría al alza el salario mínimo de convenio y, por tanto, el incremento de los costes laborales por empleado para las empresas situado en 2.553 euros de media. Este aumento reforzaría el consumo interno y el crecimiento del PIB en un momento de desaceleración. También permitiría incrementar los ingresos de la Seguridad Social y paliar su déficit, como consecuencia del incremento del gasto en pensiones. El problema es que las empresas se verían obligadas a subir sus precios y en una economía tan abierta como la española perderían competitividad. Esto supondría que los españoles consumiríamos productos fabricados en el exterior, por lo que se

estaría creando empleo en otros países y paro en el nuestro. Las empresas se verían obligadas a deslocalizarse o cerrar.

Es indiscutible que el SMI supone una barrera de entrada en el mercado laboral y que cuanto más alta sea, menos trabajadores serán contratados, sobre todo los más débiles. Para un país como España, con una de las tasas de desempleo (14%) más elevadas de la UE y con 3,2 millones de parados, es una medida más que polémica. Llama la atención que un gobierno progresista dé prioridad a los trabajadores empleados, antes que a los parados. Sánchez, Iglesias y Junqueras deberían preguntarse si se reparte mejor la riqueza subiendo salarios o creando más empleo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

La otra medida estrella del hipotético "gobierno progresista" es indiciar las pensiones a la inflación. Es decir, que, aunque la economía vaya mal, el gasto en pensiones siga subiendo a costa de aumentar el déficit y el gasto público. Esto permitiría a los jubilados mantener su poder de compra, como ha pasado durante los años de recesión, aunque se hunda la economía. Según los economistas ortodoxos esto es "pan para hoy y hambre para mañana".

Los expertos sugieren que el incremento de las pensiones se ligue al incremento de la productividad: "Si se es más rico, porque se produce más y mejor, se puede distribuir más riqueza, como ocurre en los países más desarrollados. Pero al parecer esto no es progresista". ●

Revertir las reformas

● **La labor de la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valero, es una de las más cuestionadas por los expertos. La razón es que no sólo no ha aprobado ninguna reforma estructural para crear empleo, sino que está desmontando las que creó con tanto esfuerzo su predecesora del PP, Fátima Bañez, como han alertado el Banco de España y la UE.**



Valerio prefiere que el SMI lo negocien los agentes sociales

Los expertos sugieren que las pensiones se ligen al aumento de la productividad y no a la inflación

Joaquín Maudos

Universidad de Valencia-IVIE-Cunef

Retos económicos del envejecimiento



La esperanza de vida al nacer en España ha aumentado más de 10 años en las últimas cuatro décadas; una magnífica noticia. Pero desde el punto de vista económico plantea retos de gran calado que ponen contra las cuerdas, entre otros, al déficit público y al mantenimiento del Estado del bienestar. Mucho se ha hablado del impacto sobre la viabilidad del sistema de pensiones (seriamente amenazado si cada vez vivimos más años y no se implementan reformas como alargar la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones o subir las cotizaciones), pero hay otros aspectos que sufren el impacto negativo del envejecimiento.

Con unas pensiones que van ser necesariamente menores y un aumento de la dependencia, es necesario aumentar el ahorro durante la vida laboral para hacer frente a esa contingencia que es vivir más pero con más ayuda de otros. Con salarios bajos, la presión sobre el gasto público va a ser intensa, lo que plantea una seria dificultad en un país que presenta un problema crónico de déficit público estructural.

La presión sobre el déficit público es aún mayor por el impacto del envejecimiento sobre el gasto en sanidad. Si los avances tecnológicos aumentan la eficiencia/eficacia de los tratamientos, exigen importantes inversiones, por lo que su impacto neto sobre el gasto en sanidad es incierto.

Las dimensiones económicas del envejecimiento van mucho más allá del gasto público. Una población envejecida y menos población en edad de trabajar suponen una caída en el crecimiento potencial de la economía, lo que es una mala noticia de cara al aumento futuro del bienestar. Este menor crecimiento puede intensificarse, ya que una sociedad más envejecida es menos propensa a innovar, lo que impacta negativamente sobre la productividad, que es la principal fuente de crecimiento económico.

En España, el impacto negativo del envejecimiento sobre el bienestar de las personas mayores puede ser mayor teniendo en cuenta el elevado peso que los activos inmobiliarios tienen en la riqueza de los hogares. Al ser un activo poco líquido, dificulta la posibilidad de amortiguar el efecto de la caída de la renta en los años de retiro. En este terreno, van a ser muy importantes la innovación financiera y el papel del sistema financiero, que debería desarrollar fórmulas para que los propietarios de las viviendas puedan hacer líquida esa propiedad para completar sus ingresos. Desgraciadamente las fórmulas existentes (como la hipoteca inversa) tienen un peso marginal, y hay que preguntarse por qué hasta ahora no se han extendido para implementar las reformas necesarias. La tradición y la cultura cuentan, pero en el futuro irá cambiando esa preferencia mayoritaria actual de dejar la vivienda en herencia a los hijos.

Pero no todo son malas noticias cuando se habla del impacto económico del envejecimiento. Los cambios en las pautas de consumo de los mayores abren nichos de mercado en sectores vinculados al ocio, la cultura, la salud, la arquitectura, medios de transporte, equipamiento de la vivienda, las finanzas, etcétera. Esa llamada *silver economy* es un negocio que hay que explorar y aprovechar, sobre todo en España, tercer país del mundo con la mayor esperanza de vida, sólo por detrás de Japón y Suiza. |